

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 9 MAR 2020

AUTO No. 93

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-006-2018-00289-01
DEMANDANTE:	GLORIA ESPERANZA FRANCO FLOREZ
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE FLORIDA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación, propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 559 del 12 de agosto de 2019, dictado en audiencia inicial y proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante el cual se negó el decreto de algunas de las pruebas pedidas con la demanda.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora María Esperanza Flórez de Franco y otros demandaron al Municipio de Florida, solicitando se declare al ente demandado responsable de los daños y perjuicios ocasionados con ocasión a la omisión en el cumplimiento de las normas que reglamentan el sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo (SG-SST) en el matadero de dicho municipio, lo cual conllevó a la muerte del señor Daniel Jesús Franco Victoria en accidente de tránsito, ocurrido el día 07 de octubre de 2016 al interior de las instalaciones del matadero.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 599 del 12 de agosto de 2019<sup>1</sup>, dictado en audiencia inicial en el acápite de pruebas de la parte demandante, el *a quo* dispuso negar las pruebas solicitadas en los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, al considerar que las mismas pudieron haberse solicitado mediante petición, y sin que se encuentre acreditado en el proceso que tal solicitud se hubiere realizado.

De igual forma, argumentó que dichas pruebas también resultan impertinentes frente al objeto de la demanda, pues hacen referencia a una serie de informaciones y documentos relacionados con las personas que laboraban en el matadero municipal y la conformación del COPASST, aspecto que no interesa por cuanto en la demanda no se señala en los hechos ni en las pretensiones que la persona fallecida tuviera alguna

<sup>1</sup> Ver folios 84 a 89.



relación laboral o contractual con la entidad demandada específicamente con el matadero municipal.

Así entonces, consideró que del relato de los hechos, no se observa que se pretenda endilgar a la entidad demandada responsabilidad administrativa como empleador o como parte de una relación contractual que hubiere tenido la entidad con el hoy occiso, por tanto la relación de datos del personal que estaba laborando ese día, así como los actos y documentos referidos a la existencia y funcionamiento del COPASST y los documentos que según la parte debieron ser exigidos al vehículo que causó las lesiones, no conducen a constatar la ocurrencia del hecho dañoso ni tampoco a sustentar la imputación de responsabilidad extracontractual demandada.

Bajo los mismos argumentos fue negada la prueba solicitada respecto a oficiar al Ministerio de Trabajo a fin de que certificara si el municipio de Florida (Valle), informó sobre la ocurrencia del accidente ocurrido en las instalaciones del matadero municipal el día 07 de octubre de 2016.

De otra parte, en relación con la solicitud de contrainterrogatorio de sus prohijados, esta también le fue negada, por carecer de objeto en la medida en que la parte demandada no solicitó interrogatorio de parte y el despacho tampoco la decreto de oficio.

Finalmente, sobre la inspección judicial solicitada la misma también fue negada con fundamento en los artículos 189 y 236 del CGP, al considerar que existen otros medios de prueba con los cuales se pueden constar las condiciones del lugar donde dice la parte demandante ocurrieron los hechos expuestos en la demanda.

#### IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente en síntesis que (transcripción literal):

*“Las pruebas que fueron negadas por el despacho se fundamentan en las normas de seguridad social que reglamentan todas las actividades laborales tanto de trabajadores vinculados directamente como trabajadores independientes el enfoque que hace el despacho es solamente relacionado con una supuestamente vinculación laboral que no ha sido alegada en la demanda, eso se alego fue en la contestación de la demanda, pero en la demanda como tal nunca se manifestó que el señor Daniel de Jesús Franco Victoria estuviera vinculado con el matadero municipal pero las normas de seguridad social que rigen en nuestro país si lo arropan a él como trabajador, digamos que estaba vinculado con otras personas que tenían contrato o transportaban el ganado surtiendo o llevando para otros lados con el matadero pero nunca tuvo vinculación, y eso sí que quede claro, porque reitero en la contestación de la demanda se hizo alusión a que el señor quizás tuvo relación laboral con el matadero pero nunca en la demanda se ha manifestado eso, de modo que las pruebas se solicitan porque la seguridad social nos cubre a todos trabajadores vinculados laboralmente como trabajadores independientes y ese aspecto es que las pruebas fueron solicitadas para corroborar que efectivamente en ejercicio del cumplimiento de la obligación que tenía el matadero de hacer efectivas esas normas de seguridad social para la protección de todas las personas que ingresaban al matadero pues no se hubiera presentado en caso de haber omisión por parte del*



*matadero el accidente que es el punto central que nos tiene ocupados aquí la demanda, si el matadero fue omiso o no fue omiso al cumplir las normas de seguridad social que pudieron conllevar o evitar el accidente que ocurrió al interior de la zona de cargue y descargue. Hago alusión a todas las pruebas que fueron solicitadas y negadas en esta instancia...”*

## CONSIDERACIONES:

### 5. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

**“Art. 243.-** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.”

### 6. DEL DECRETO DE PRUEBAS

Conforme con lo establecido en el artículo 180<sup>2</sup> de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y terceros, siempre que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales existe disconformidad.

El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia probatoria, en lo que no esté expresamente regulado se aplicarán las normas del Estatuto Procesal Civil, hoy Código General del Proceso.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 en su artículo 168 establece que *“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”*, así las cosas, de la norma en cita se colige que para determinar el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, se debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

### 7. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

<sup>2</sup> **Artículo 180. Audiencia inicial.** Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

10. **Decreto de pruebas.** Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.



- ¿Es procedente negar las pruebas solicitadas en la demanda, al no haber sido solicitadas mediante derecho de petición, además de ser impertinentes, por cuanto las mismas no conducen a constar la ocurrencia de los hechos ni mucho menos la imputación de responsabilidad extracontractual que se alega?

## 8. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328<sup>3</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>4</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Conforme a las normas precedentemente citadas, se colige que el juez debe limitarse a resolver los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los cuales han de estar relacionados, en virtud de la congruencia, con las consideraciones que sustentaron la decisión del *a quo*.

Al respecto, el Consejo de Estado señaló que, “... la eficacia de la sustentación de los recursos interpuestos por los apelantes únicos, parte de razones específicas y concretamente dirigidas a refutar o contradecir los apartes de los fallos que consideraren adversos o perjudiciales a sus individuales intereses dentro de la relación jurídico-procesal”.

Ahora bien, es menester señalar que el análisis del presente asunto se centrara a resolver expresamente la inconformidad planteada por el apoderado de la parte demandante en cuanto las pruebas documentales que le fueron negadas por el juez de primera instancia, pues se observa que sus argumentos van dirigidos solamente respecto a estas.

Frente al tema probatorio, el Consejo de Estado<sup>6</sup> en reciente jurisprudencia recordó:

“(...)

23. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado<sup>7</sup>, se considera que para verificar: *i) la pertinencia de una prueba se debe revisar que guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba se debe revisar*

<sup>3</sup> Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

(...)

<sup>4</sup> ARTÍCULO 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación número: 05001-23-31-000-2000-03018-01.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, providencia del 22 de mayo de 2019, Radicación número: 05001-23-33-000-2018-02345-01(PI).

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 7 de febrero de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número único de radicación 25000232700020100016201; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1.º de marzo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000232400020023000303.



que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho, para lo cual:  
a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar<sup>8</sup>; **iii) la utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua; es decir, que no tenga razón de ser porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba<sup>9</sup>; y **iv) la licitud** de la prueba...”

Acerca del decreto de las pruebas, el Consejo de Estado<sup>10</sup> ha dicho:

“Las disposiciones del Código General del Proceso, en relación con el régimen probatorio, indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, **las notoriamente impertinentes**, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”<sup>11</sup>

Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, **el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad**. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.” (Negrilla y subraya fuera de texto).

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, en el caso concreto se observa que el a quo negó las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante, al no haber sido solicitadas mediante derecho de petición, además de considerarlas impertinentes, por cuanto las mismas no conducen a constatar la ocurrencia del hecho dañoso ni tampoco a sustentar la imputación de responsabilidad extracontractual endilgada a la entidad demandada.

La parte demandante solicitó con la demanda<sup>12</sup> decretar las siguientes pruebas:

“(…)

- La parte demandante solicitó se oficie a la Alcaldía Municipal de Florida, para que allegue los siguientes documentos:

1. Respecto del personal que se encontraba laborando en el matadero municipal de florida el 07 de octubre de 2016:

- A. Nombres y apellidos completos.
- B. Dirección de residencia
- C. Cargo que desempeñaban para la fecha
- D. Horario de trabajo

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02.

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00.

<sup>10</sup> Auto del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 20 de mayo de 2015. Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00691-01.

<sup>11</sup> **Artículo 168. Rechazo de plano.**

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

<sup>12</sup> Ver folios 53 a 54.



*E. Funciones que se desempeñan para la fecha*

*F. Si en la actualidad se encuentran trabajando en el matadero municipal de florida.*

2. *Copia del acto administrativo que acredite las funciones del cargo desempeñado por cada trabajador el 07 de octubre de 2016.*
3. *Copia de los documentos que demuestren el cumplimiento de lo preceptuado en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 1, 6 y 7 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario) por parte del matadero de Florida.*
4. *Incorforme del procedimiento seguido al interior del matadero de florida el día 07 de octubre de 2016 que conllevó a la autorización de ingreso a sus instalaciones del vehículo de placas VBV-641.*
5. *Informe de cuales fueron los documentos exigidos a los ocupantes del vehículo de placas VBV-641 para permitir su ingreso a las instalaciones del matadero de florida.*
6. *Informe si a los ocupantes del vehículo de placas VBV-641 se le exigió el cumplimiento de los requisitos de afiliación a la seguridad social (EPS, ARL, AFP) para permitir el ingreso a sus instalaciones del matadero de Florida.*
7. *Copia de la planilla de autorización de ingreso del vehículo VBV-641 y sus ocupantes.*
8. *Informe sobre quienes componían el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Copasst – o vigía de seguridad y salud en el trabajo el día 07 de octubre de 2016.*
9. *Actos administrativos que acrediten quienes conforman el COPASST para el día 07 de octubre de 2016.*
10. *Informe cual era la administradora a la que se encontraban afiliados los trabajadores del matadero municipal de Florida para el día 7 de octubre de 2016.*
11. *Actos administrativos que consten la afiliación del persona a la ARL.*

*(...)*

- *Solicitó se oficiara al Ministerio del Trabajo a fin de que certifique lo siguiente:*

*Si el Municipio de Florida informó sobre la ocurrencia del accidente ocurrido en las instalaciones del matadero municipal el día 07 de octubre de 2016...”*

Indicó la parte demandante que, los documentos requeridos no fueron solicitados para demostrar una relación laboral entre el matadero municipal y la víctima, sino que fueron solicitados para corroborar el cumplimiento de una obligación que tenía el matadero como lo es la seguridad social frente a los trabajadores vinculados laboralmente como trabajadores independientes, que ingresaban al matadero, toda vez que considera que los hechos no se hubieran presentado si se hubieran cumplidos con tales normas.

Para resolver lo anterior, es preciso desarrollar los siguientes puntos:

## 1. PRUEBAS SOLICITADAS MEDIANTE DERECHO DE PETICIÓN.

Lo primero que debe indicarse es que la carga de la prueba es una herramienta procesal que permite a las partes aportar los elementos de prueba para acreditar los hechos que se alegan en la demanda, por lo tanto, su aplicación trae como consecuencia que aquella parte que no aporte la prueba de lo que alega, soporte las consecuencias.

Esta figura procesal, se encuentra consagrada en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, en la que se establece: “...*Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”.

De otra parte, en lo que respecta a la carga de las partes en los asuntos litigiosos, tenemos que conforme a lo consagrado en el artículo 103 del CPACA “...*Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código*”.

Las normas enunciadas, deben interpretarse armónicamente con los deberes impuestos a las partes procesales para la obtención de los elementos de convicción que pretendan hacer valer, como es el caso de lo previsto en el numeral 10 del artículo 78 del CGP<sup>13</sup>, en el que se define como un deber de las partes y de los apoderados el abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por intermedio de petición hubiera podido conseguir.

De igual forma, el inciso 2 del artículo 173 ibídem, establece que “...*El juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente...*”.

En consideración a lo expuesto, es claro que de acuerdo con los deberes procesales a cargo de la parte demandante, le correspondía realizar las gestiones necesarias de cara a la consecución de las pruebas documentales que solicitó en la demanda.

Por lo tanto, al no haberse allegado al expediente, prueba sumaria de que se hubiese realizado una petición para su consecución, se confirmala de decisión del a quo de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del CGP. Lo anterior, sin dejar de lado las facultades oficiosas consagradas en el artículo 213 del CPACA, que permiten al juez decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para esclarecer puntos difusos de la controversia, en búsqueda de la verdad.

<sup>13</sup> “Artículo 78. Son deberes de las partes y sus apoderados:  
(...)”

10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiera podido conseguir (...)”



## 2. PERTINENCIA DE LA PRUEBA

Ahora bien en cuanto a la pertinencia de las pruebas como primera medida, el despacho indica que de conformidad con el artículo 168 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del CPACA, es enfático en precisar que *“las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”* deben ser rechazadas por el Juez.

De igual forma, el artículo 164 del CGP señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siempre que se relacionen con los supuestos fácticos objeto de controversia.

Visto el asunto de esta manera, es claro que para que una prueba pueda ser decretada debe tener conexidad con los hechos objeto de controversia dentro del proceso.

Bajo estos supuestos y en los términos que quedó fijado el litigio, la controversia en este caso gira entorno a determinar si hay lugar a declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Florida, por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por el fallecimiento del señor Daniel Jesús Franco Victoria con ocasión de un presunto accidente de tránsito ocurrido dentro de las instalaciones del matadero municipal el día 7 de octubre de 2016.

Establecido de esta forma el litigio del asunto, es claro que tal como lo dedujo el *a quo* las pruebas solicitadas por la parte demandante en nada contribuyen para constatar la ocurrencia del hecho dañoso ni mucho menos la imputación de responsabilidad, pues recordemos que para que la prueba sea pertinente es preciso revisar que guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar.

Así entonces, respecto de las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante, considera el despacho pertinente indicar que las funciones del COPASST se establecieron en el Decreto 614 de 1984 (derogado por el Decreto 1072 de 2015). Posteriormente, en la Resolución nro. 2013 de 1986 se establecieron las funciones de lo que entonces era el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial hoy COPASST, las cuales continúan vigentes en la normatividad Colombiana. Mediante Decreto 1443 de 2014 (compilado en el Decreto 1072 de 2015) estableció actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las que se debía contar con la participación del COPASST y posteriormente, en la Resolución nro. 0312 de 2019 se establecen los valores asignados a cada una de estas responsabilidades.

En virtud de lo expuesto, es evidente que las pruebas solicitadas van encaminadas a establecer las condiciones de trabajo de los empleados del matadero municipal, por lo que tal como lo dedujo el *a quo* dichas pruebas no resultan pertinentes para solucionar el problema jurídico planteado en este caso, pues no aportan elementos de juicio necesarios para tal fin.

Además, los argumentos esgrimidos por el recurrente en la sustentación del recurso no





desvirtúan la impertinencia de la prueba en cuestión, por cuando los mismos sólo se refieren a que las mismas fueron solicitadas para corroborar el cumplimiento de una obligación del matadero municipal respecto a la seguridad social de los trabajadores vinculados laboralmente y los trabajadores independientes que ingresaban al matadero, aspectos que no hacen parte del estudio de la responsabilidad extracontractual planteada en el caso concreto. Lo anterior, sin dejar de lado que el juez decreto de oficio todas aquellas pruebas que considero útiles, conducentes y pertinentes para resolver el problema jurídico planteado.

Por lo tanto, como quiera que las pruebas documentales no fueron solicitadas mediante derecho de petición, además de que las mismas no resultan idóneas para demostrar los hechos planteados en la demanda con relación a los cargos en que se fijó el litigio, la decisión habrá de ser confirmada.

En consecuencia, se;

### RESUELVE:

**PRIMERO.- CONFIRMAR** el auto interlocutorio nro. 559 dictado en audiencia inicial del doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**



**OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA**  
Magistrado

Elob. Yuzani López  
Vc Bo. Secretario